

Boletín Oficial

DE LA PROVINCIA DE ORENSE.

Se publica los martes, jueves y sábados de cada semana.—Se suscribe en la imprenta de D. Cesáreo Paz y Hermano, Fuente del Rey número 6 á 20 rs. trimestre para esta capital, y 30 para fuera franco de porte por trimestres adelantados.—Números sueltos á 12 cuartos el pliego.

PARTE OFICIAL

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

S. M. la REINA nuestra Señora (Q. D. G.) y su augusta Real Familia continúan en el Real Sitio de San Ildefonso sin novedad en su importante salud.

ARTICULO DE OFICIO.

PRIMERA SECCION.

GOBIERNO DE PROVINCIA.

Número 486.

En la Gaceta de Madrid número 202 del viernes 20 de julio último se lee lo siguiente:

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

Gobierno.—Negociado 3.º—Quintas.

El Sr. Ministro de Estado, interino de la Gobernacion, dice con esta fecha al Gobernador de la provincia de Burgos lo que sigue:

«Enterada la Reina (Q. D. G.) del expediente promovido por Patricio Plaza, en apelacion del acuerdo por el que el Consejo de esa provincia desestimó su instancia relativa á que se eximiera del servicio de las armas al hijo del recurrente Domingo, quinto del reemplazo ordinario del año último por el cupo de Moradillo de Roa, en atencion á que habia sido medido con la talla que establece la ley de 1.º de mayo del citado año á pesar de proceder del sorteo de 1853;»

Considerando que la Real orden de 24 de agosto de 1859, aclaratoria del art. 2.º de la ley de 1.º de mayo anterior, dispuso que todos los mozos procedentes de los sorteos de 1837 y 1853, que fuesen llamados con arreglo al art. 87 de la ley de quintas vigente para cubrir plaza en aquel año, debían ser medidos por la talla que determina la referida ley de 30 de enero de 1836;

Considerando que Domingo Plaza, según resulta del expediente, no llegó á la talla establecida por el art. 73 de la misma ley de 30 de enero;

Considerando que la circunstancia de no haber interpuesto reclamacion contra el

fallo del Ayuntamiento no puede perjudicarle, por cuanto fué dictado con anterioridad á la mencionada Real orden circular aclaratoria de la ley de 1.º de mayo de 1859;

S. M., de conformidad con el dictamen de la Seccion de Gobernacion y Fomento del Consejo de Estado, se ha servido disponer que sea dado de baja en el ejército el referido Domingo Plaza, llamándose para su reemplazo el número á quien correspondiera, y que esta resolusion se circule para que sirva de regla general en casos análogos.

De Real orden, comunicada por el expresado Sr. Ministro, lo traslado á V. S. para su inteligencia y efectos correspondientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 10 de julio de 1860.—El Subsecretario, Juan de Lorenzana.—Sr. Gobernador de la provincia de...

Número 487.

En la Gaceta de Madrid número 204 del domingo 22 de julio último se lee lo siguiente:

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

Gobierno.—Negociado 3.º—Quintas.
—Circular.

Por el Ministerio de la Guerra se trasladó á este de la Gobernacion en 5 de febrero último la comunicacion siguiente, que en 26 de enero anterior habia dirigido á aquel Ministerio el Director general de Sanidad militar.

«Enterado del escrito que por el Ministerio de la Gobernacion fué dirigido al del digno cargo de V. E. en el que se trascribe la comunicacion que elevó al primer el Gobernador civil de Logroño, haciendo presentes las interpretaciones á que en su sentir da lugar la redaccion del número 53 del orden cuarto de la clase primera del cuadro de exenciones físicas para el servicio militar, consideré conveniente, para emitir el informe que sobre el particular se tuvo á bien pedirme por Real orden de 6 de diciembre último, oír á la junta superior facultativa del cuerpo; y de conformidad con el dictamen de ésta, tengo el honor de hacer presente, devolviendo el escrito mencionado, que el número precitado del cuadro de exenciones y que se halla en él redactado en los términos siguientes, «cáries y necrosis de todos los incisivos, ó de todos los molares de una mandíbula, ó de la mayor parte de las dos,» aunque no á todas, se presta á al-

guna de las interpretaciones que el Gobernador civil de Logroño hace notar.

Con efecto, siendo la cáries y la necrosis alteraciones patológicas distintas, al emplearse la conjuncion copulativa entre las dos se ofrece lugar á duda sobre si para constituir exencion se requiere el concurso de ambas, ó basta cada una sola para eximir del servicio en las circunstancias ó casos que el número determina. Desde luego se desprende que con aquella conjuncion no se ha tenido por objeto hacer preciso el concurso de ambas alteraciones para que motive exencion, pues abundan en el cuadro los números en que se comprenden en uno solo y mediante la misma conjuncion enfermedades muy distintas de un órgano ó entraña determinada, sin que se entienda por esto necesaria la existencia simultánea de todas ellas para que haya lugar á declaracion de inutilidad; sin embargo, para evitar la interpretacion del número de que se trata en el primer sentido, aunque no indispensable, pudiera ser conveniente que en lugar de «cáries y necrosis» se dijera «cáries ó necrosis.»

Aclarada de esta manera la cuestion, no puede ofrecer motivo á interpretacion ó dudas lo restante del número precitado, porque cada vez que se emplea en él la ó disyuntiva es con el objeto de designar un caso de exencion diferente; y que así como la cáries ó la necrosis de todos los incisivos es causa de inutilidad, lo es también una ó otra cuando existe en todos los molares de una mandíbula ó en la mayor parte de las dos.»

Y habiendo tenido á bien la Reina (Q. D. G.) resolver este asunto de acuerdo con lo expuesto en la comunicacion preinserta, de Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de ese Consejo de provincia, y á fin de que se tenga como regla general y enmienda del reglamento rigiente de exenciones físicas. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 11 de julio de 1860.—Calderon Collantes.—Sr. Gobernador de la provincia de...

Número 488.

En la Gaceta de Madrid número 206 del martes 24 de julio último se lee lo siguiente:

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

Administracion.—Negociado 6.º

Remitido á informe de las Secciones de Estado, Gracia y Justicia, Gobernacion y Fomento del Consejo de Estado

el expediente de autorizacion negada por V. S. al Juez de primera instancia de Ayamonte para procesar á D. Domingo Rodriguez y D. Juan Fernandez Mesa, Alcalde y Secretario respectivamente del Ayuntamiento de El Granado, han consultado lo siguiente:

«Estas Secciones han examinado el expediente en virtud del que el Gobernador de la provincia de Huelva ha negado al Juez de primera instancia de Ayamonte la autorizacion que solicitó para procesar al Alcalde y Secretario del Ayuntamiento de El Granado.

Resulta:

Que teniendo noticia el Gobernador mencionado de que habia síntomas de alterarse el orden público en unas minas sitas en el término de El Granado, comunicó las órdenes oportunas al Alcalde de dicho pueblo:

Que como delegado de este funcionario, pasó el Secretario del Ayuntamiento á las minas; y auxiliado por alguna fuerza de carabineros, tomó las medidas que estimó oportunas, y entre otras la detencion del arrendatario de dichas minas, á quien se suponía causa de la alteracion ocurrida por falta de puntualidad en el pago de los jornales:

Que según el Gobernador manifiesta, el Alcalde dió parte de esta detencion, alegando ademas como causa de ella que el detenido carecia de cédula de vecindad; y en su consecuencia, pedidos informes al Gobernador civil de Vizcaya, y resultando éstos favorables, mandó el de Huelva que se expidiera dicho documento:

Que en su informe, que obra en el testimonio que se ha tenido á la vista explica el Alcalde la detencion mencionada solo por ser el detenido causa del alboroto, manifestando que ni se le exigió la cédula de vecindad ni se le entregó la que dispuso el Gobernador, por estar provisto de tal documento:

Que se instruyeron las primeras diligencias judiciales acerca de estos sucesos de oficio, y despues á instancia del detenido, quien ademas se ha querrellado de la manera cómo fué tratado y conducido á prision, causándosele vejaciones y ofensas personales:

Que el Juez de primera instancia pidió, de acuerdo con el parecer del Promotor fiscal, la autorizacion de que se trata, fundándose en que hay lugar á la aplica-

ción de los artículos 293. párrafo primero, y 300 del Código penal vigente.

Que el Gobernador la denegó de acuerdo con el Consejo provincial, fundándose, en cuanto al Secretario, en que obró en virtud de obediencia debida; y respecto del Alcalde, en que con arreglo al artículo 73 de la ley municipal vigente tomó como delegado del Gobierno, medidas protectoras de la tranquilidad pública; y que con arreglo a la Real orden de 19 de noviembre de 1858 detuvo á quien viajaba sin la correspondiente cédula de vecindad.

Visto el párrafo duodécimo del art. 8.º del Código, según el que está exento de responsabilidad criminal el que obra en virtud de obediencia debida.

Considerando que el Secretario del Ayuntamiento de El Granado obró con arreglo á las instrucciones que le dió el Alcalde; y aprobada su conducta por este funcionario, asumió toda la responsabilidad que pueda haber por las medidas adoptadas;

Las Secciones opinan que debe confirmarse la negativa del Gobernador de Huelva en lo que se refiere al Secretario del Ayuntamiento de El Granado, y lo acordado.

Y habiéndose dignado S. M. la Reina (Q. D. G.) resolver de conformidad con lo consultado por las referidas Secciones, de Real orden lo comunico á V. S. para su inteligencia y efectos correspondientes. Dios guarde á V. S. muchos años. San Ildefonso 14 de julio de 1860.—Calderón Collantes.—Sr. Gobernador de la provincia de Huelva.

Gobierno.—Negociado 3.º.—Quintas.

El Sr. Ministro de Estado, interior de la Gobernación, dice con esta fecha desde San Ildefonso al Gobernador de la provincia de Toledo lo que sigue:

«Enterada la Reina (Q. D. G.) del expediente promovido por Isaac Gomez en solicitud de que se revoque el acuerdo por el que el Consejo de esa provincia le declaró soldado por el cupo de San Pablo en el reemplazo del año último para el ejército, á pesar de haber alegado la exención de nieto único que mantiene á su abuela pobre y sexagenaria.

Vistos el párrafo octavo del art. 76, y la regla segunda del 77 de la ley de quintas vigente.

Considerando que de la justificación testifical presentada por el expresado quinto resulta que su madre vive en estado de celibio, pero mantenida por Pedro Garcia.

Considerando que al señalarse en el párrafo sétimo del art. 76 la excepción de hijo único y legítimo que mantenga á su madre pobre que fuere célibe ó viuda, habiéndole esta criado y educado, debe deducirse que solo esta excepción de que se hace mérito especial en la ley es la que se concede á los hijos ilegítimos.

Considerando que la excepción de nieto alegada por Isaac Gomez, siendo como es hijo ilegítimo, no se halla comprendida en ninguno de los demás párrafos de dicho art. 76; S. M. de conformidad con el dictamen de la Sección de Gobernación y Fomento del Consejo de Estado, se ha servido confirmar el mencionado acuerdo del Consejo de esa provincia, y mandar que esta resolución se publique en la Gaceta para que sirva de regla general en casos análogos.

De Real orden, comunicada por el expresado Sr. Ministro, lo traslado á V. S.

para los efectos correspondientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 17 de julio de 1860.—El Subsecretario. Juan de Lorenzana.—Sr. Gobernador de la provincia de...

Número 489.

En la Gaceta de Madrid número 208 del jueves 26 de julio se lee lo siguiente:

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

Administración.—Negociado 6.º

Remitido á informe de las Secciones de Estado, Gracia y Justicia, Gobernación y Fomento del Consejo de Estado el expediente de autorización negada por V. S. al Juez de primera instancia de la capital para procesar á D. Manuel Ponce de Leon, Administrador de Correos de dicho punto, han consultado lo siguiente:

«Estas Secciones han examinado el expediente en virtud del que el Juez de primera instancia de las Palmas pidió al Gobernador de la provincia de Canarias autorización para procesar al Administrador de Correos de aquella ciudad D. Manuel Ponce de Leon.

Resulta que el procedimiento tuvo lugar con motivo de la denuncia hecha de haberse demorado la remisión de una carta puesta en la estafeta de las Palmas á la cartería de Guia.

Que de las diligencias practicadas sobre este hecho aparece que la expresada carta tuvo entrada en dicha estafeta el 19 de diciembre de 1858, según el sello estampado en la misma por aquella oficina; cuya carta le fue escrita desde la Laguna á Doña Joaquina Soto de Sanchez, dándole la enhorabuena por la colocación de su hijo en el batallón provincial, la que recibió la interesada el 22 de febrero de 1859 por no haber llegado hasta el mismo día con la correspondencia que condujo el veredero de Guia, que era la dirección que se dió á dicha carta como residencia de la Doña Joaquina.

Que recibida declaración al citado Administrador, dijo que en la oficina de su cargo no se detenía la expedición de la correspondencia, y que no sospechaba quien pudiera haber detenido la citada carta, pues no había tenido conocimiento del hecho ni se le había dado queja alguna.

Que el Juez, oído el Promotor fiscal, pidió al Gobernador la autorización para procesar al citado Administrador, la que le fue negada previo informe del Consejo provincial.

Vistas las disposiciones que comprenden el título 3.º, libro 2.º del Código penal:

Vista la ley 6.ª, libro 5.º, título 15 de la Novísima Recopilación, por la que se reitera el cumplimiento de las ordenanzas de Correos, y su párrafo quinto en el que se dispone que las faltas que se cometan por los dependientes del ramo y causen perjuicio al público, deberán corregirse gubernativamente por el Director general como superior gerárquico.

Considerando que en las disposiciones citadas ni en las demás que contienen el Código penal se califica de delito la demora en la remisión de la correspondencia por los empleados del ramo de Correos, cuyo hecho constituye una mera falta en el servicio de las que deben corregirse gubernativamente por el superior gerárquico, según lo dispuesto en la citada ley, sin perjuicio de la responsabilidad civil que los particulares puedan exigir en ciertos casos.

Considerando que ya se atiende al ningún interés en demorar la remisión de una carta de mero cumplimiento, ya que si tal interés hubiese habido de parte del citado Administrador, no la habría dado la entrada en aquella oficina

con el sello del 19 de diciembre de 1858 en que ingresó, sino con el del día en que le hubiese acomodado darle curso, lo cual hace ver la aingana responsabilidad criminal que debe exigirse por aquel hecho.

Las Secciones opinan que debe confirmarse la negativa del Gobernador de Canarias.

Y habiéndose dignado S. M. la Reina (Q. D. G.) resolver de conformidad con lo consultado por las referidas Secciones, de Real orden lo comunico á V. S. para su inteligencia y efectos consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos años. San Ildefonso 14 de julio de 1860.—Calderón Collantes.—Sr. Gobernador de la provincia de Canarias.

Remitido á informe de las Secciones de Estado, Gracia y Justicia, Gobernación y Fomento del Consejo de Estado el expediente de autorización negada por V. S. al Juez de primera instancia de San Clemente para procesar á D. Casimiro Lichana y D. José María Fernandez, Alcaldes que fueron respectivamente en 1858 y 1859 de Alalaya de Canavete, han consultado lo siguiente:

«Estas Secciones han examinado el expediente en virtud del que el Juez de primera instancia de San Clemente pidió al Gobernador de la provincia de Cuenca autorización para procesar á D. Casimiro Lichana y á D. José María Fernandez, Alcaldes que fueron respectivamente en 1858 y 1859 de Alalaya de Canavete.

Resulta que el procedimiento tuvo lugar con motivo de la denuncia presentada al juzgado, manifestando que el citado Lichana había dejado de corregir las faltas cometidas por varios vecinos de aquel pueblo, causando daño en las viñas y sembrados, y acerca de las que se le dió conocimiento.

Que, por iguales faltas impuso á otros la pena de trabajos en los caminos públicos y de limpiar los pozos, concejiles, y que exigió algunas multas en metálico por causas análogas.

Que de las diligencias practicadas por el juzgado aparece la certeza de los hechos denunciados, como tambien que el citado Fernandez dejó de corregir á Romualdo Alvarez, como Alcalde en 1858, por el daño que ocasionó en las viñas con sus caballerías.

Que el Juez, oído el Promotor fiscal, pidió al Gobernador de la provincia autorización para procesar á los citados Alcaldes, la que le fue negada previo informe del Consejo provincial y oídos los interesados.

Que estos, si bien no negaron los hechos, trataron de excusarse por carecer de los conocimientos necesarios y por lo insignificante de los mismos, así como por no haber llegado á su noticia las faltas cometidas por algunos de aquellos vecinos, por cuya razón no pudieron corregirse por su autoridad.

Visto el art. 495 del Código penal, que castiga con la multa de medio duro á cuatro duros que cometieren las faltas que en el mismo se expresan.

Vista la disposición 2.ª del Real decreto de 13 de mayo de 1855 estableciendo reglas acerca de las penas que deben imponer las Autoridades administrativas en castigo de faltas, por la que se manda que las faltas cuyas penas sean multa ó reprobación y multa, podrán ser castigadas gubernativamente á juicio de dichas Autoridades.

Visto el art. 300 del mismo Código, que impone las penas que el mismo marca al empleado público que desempeñando un acto del servicio cometiere cualquiera vejación injusta contra las personas.

Visto el Real decreto de 14 de abril de 1848 y el de 8 de agosto de 1851, que prohíben á las Autoridades de cualquier clase que sean imponer y recaudar

multas en metálico, declarando que el que lo contrario hiciere se considerará comprendido respectivamente en los artículos 526 y 527 del Código penal.

Considerando quedas faltas que dejó de corregir el citado Alcalde Casimiro Lichana están comprendidas en el citado artículo 495 del Código, y pudo en tal concepto haberlas castigado gubernativamente según lo establecido en el expresado Real decreto de 1855, no debiendo por tanto calificarse de delito aquella omisión, y si solo como una falta, cuya corrección corresponde al superior gerárquico en la línea gubernativa, y que en igual caso se encuentra el citado Fernandez por el hecho que se le imputa.

Considerando que habiendo el referido Lichana impuesto á otros por las mismas faltas, comprendidas en el art. 495, las penas de trabajos públicos y exigido á algunos multas en metálico, incurrió en la responsabilidad que marcan los citados artículos 300, 526 y 527 del Código penal.

Las Secciones opinan que debe negarse la autorización respecto á D. José María Fernandez y á D. Casimiro Lichana por no haber corregido las indicadas faltas, y concederse en cuanto á este último por los demás hechos que se le imputan.

Y habiéndose dignado S. M. la Reina (Q. D. G.) resolver de conformidad con lo consultado por las referidas Secciones, de Real orden lo comunico á V. S. para su inteligencia y efectos consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos años. San Ildefonso 14 de julio de 1860.—Calderón Collantes.—Sr. Gobernador de la provincia de Cuenca.

CUARTA SECCION.

Juzgado de primera instancia de Orense.

Don Francisco Rodriguez Rapela, escribano supernumerario del juzgado de primera instancia de Orense.—Certifico que en el mismo y por mi oficio se sustanció expediente de menor cuantía por D. Manuel Prieto de esta vecindad, contra Manuel de Puga y otros de las Caldas, sobre pago de 2,984 rs. precedentes de atrasos de renta; el cual fué decidido por la sentencia que á la letra dice:

«En la ciudad de Orense á 30 de julio de 1860, el Sr. D. Bernardo Maria Hervás, juez de primera instancia de este partido, habiendo visto estos autos de menor cuantía, entre partes; de la una Don Manuel Prieto de esta vecindad; y de la otra Antonia Fuentes, Manuel Puga, Rodrigo y Jacinto Blanco, Joaquín Gonzalez y Catalina Fuentes, vecinos de la parroquia de las Caldas, y Manuel Fernandez que lo es de Cudeiro, sobre pago de reales:

Resultando reclamar el Prieto en representación de su esposa la cantidad de 2,984, resto del importe de 13 moyos de vino de renta anual, contra los citados Antonia Fuentes, viuda de Gaspar Pita, Manuel de Puga, Rodrigo y Jacinto Blanco, Joaquín Gonzalez, Catalina Fuentes y Manuel Fernandez, mancomunadamente como poseedores del foro llamado de la Viña de Abajo, cuyos atrasos comprenden desde el año de 1851 al de 1858 ambos inclusivos, á razon de 74 rs. moyo, imputando la excepción en cuanto á precios objetados en el acto de conciliación, porque faltando las cosechas no pudo el ayuntamiento del domicilio fijar precios á no ser por el mercado del vino de Castilla, ó del piquísimo limpio que se cogió en el país, habiéndose exigido por el de renta del Estado desde 80 rs. á mas de 140 el moyo;

Resultando que conferido traslado á los demandados y practicados las diligencias consiguientes se mantuvieron y están declarados en rebeldía, excepto la Antonia Fuentes que alegó no ser poseedora en el

La subasta se celebrará el día 28 de agosto próximo desde las once de su mañana hasta las doce de la misma en el despacho del Sr. Gobernador civil de la provincia, ante su autoridad, el Administrador de Propiedades y Escribano del Juzgado de Hacienda, é igual remate se verificará en día y hora en las Casas consistoriales de los pueblos que constituyen cabeza de partido ante el Alcalde

constitucional. Procurador y sé de Escribano, y en la Corte en el Gobierno civil de aquella provincia; entendiéndose esta triple subasta, respecto de los tipos que excedan de 20,000 rs. y no pasando de esta suma en la capital y en los partidos solamente, quedando pendiente el remate de aprobación de la Dirección general.

La licitación empezará por el orden que se figura en este anuncio, y se admitirán posturas por partidos judiciales en pliegos cerrados a todos los interesados, y después se admitirán también proposiciones genérales, pero unas y otras han de ser precisamente presentadas en la hora prefijada de once a doce.

	Número de fin. as.	Su tipo. Rs. vn.
Partido de Ginzo...	730	31,702.35
de la capital...	221	9,757.90
de Allariz...	383	16,701
de Ribadavia...	127	2,312.96
de Baños...	339	14,983.35
de Calatoya...	286	9,730.38
de Verín...	314	10,114.18
de Valdeorras...	222	7,906.35
de Viana...	412	7,916.39
de Trives...	131	6,577.90
de Caballino...	217	11,395.10

Modelo de proposición.

Don . . . , vecino de . . . , se comprometo a llevar en arrendamiento las fincas que figuran en el presupuesto formado por la Administración principal de Propiedades y Derechos del Estado, correspondientes al partido de . . . , por la suma de . . . rs., conformándose en un todo con el pliego de condiciones formado para este objeto, en virtud del cual ha entregado en la Caja de Depósitos de la Tesorería de esta provincia la fianza de . . . rs. que previene la instrucción, según lo acredita el recibo adjunto.

(Fecha y firma)

Pliego de condiciones para la subasta de arrendamiento de las fincas del Clero Secular y Regular y demás procedencias por frutos del presente año, cuyo número y tipo se figura en el anuncio.

1.º El remate se celebrará el día y hora que se cita, el cual será triple y simultáneo en esta capital, en los partidos y en la Corte, si la cantidad del tipo excede de 20,000 rs., y si no, pasará de esta suma en la capital y en los partidos solamente, quedando pendiente de aprobación de la Dirección general.

2.º No se admitirá postura que la cantidad que marcan los anuncios por arriendo anual; debiendo acompañar al pliego de proposición el recibo de la Caja de Depósitos del importe del 10 por 100 en concepto de fianza.

3.º Si las fincas tienen labores hechos y frutos pendientes el día de la adjudicación del arrendamiento, pagará el rematante a prorrata y en metálico el valor que a juicio de peritos se gradúe a aquellos.

4.º El rematante queda obligado al fenece el contrato, a dejar las fincas en el buen estado en que se le entregan, quedando sujeto a satisfacer los daños y perjuicios o deterioros que a juicio de peritos se notaren.

5.º Las fincas que tengan arbolado o viñedo serán cuidadas con el mayor esmero, haciendo las labores de costumbre según el uso del país, y con la absoluta prohibición de cortar el arbolado, ni menos acortarlo, a no ser la limpia o poda, bajo la responsabilidad consignada en la condición anterior.

6.º El arrendatario satisfará por semestres adelantados el importe del arriendo si es de 20,000 rs. inclusive en adelante, por trimestres también adelantados si excediendo de 20,000 rs. no le gase a 20,000,

y anualmente a su vencimiento cuando no pase de 20,000 rs., pero adelantando en este caso a satisfacción del Administrador principal.

7.º El arriendo se entiende por frutos del corriente año, que principiará a contarse desde 1.º de enero y concluirá en fin de diciembre.

8.º Si las fincas después de arrendadas se enagenaren, estará obligado el comprador a respetar el año del arriendo.

9.º No se admitirán posturas a ninguno que sea deudor al Estado.

10.º Los arrendatarios no tendrán derecho a pedir perdon o rebaja, ni solicitar pagar en otros plazos, ni en distinta especie que lo estipulado; el contrato ha de ser a suerte y ventura, sin opción a ser inmutuados por extinción de langosta, pedrisco u otro incidente imprevisto.

11.º Si no cumplieren la obligación de pago en los términos contratados, quedarán sujetos a la acción que contra ellos intente la Administración principal y a satisfacer los daños y perjuicios a que diessen lugar. Si llegare el caso de ejecución para la cobranza se entenderá rescindido el contrato en el mismo hecho, y se procederá a nuevo arriendo en quiebra.

12.º Satisfarán de su cuenta y riesgo en la Administración principal de Propiedades y Derechos del Estado, y en monedas corrientes de oro o plata el importe del arriendo en los plazos marcados.

13.º No sufrirán otros desembolsos que el pago de derechos a los Escribanos, Fieles de fechos y pregoneros; siendo igualmente de su cuenta el papel que se invierta en el expediente y escritura y las dietas de los peritos en caso de justiprecio.

14.º Se admiten posturas por partidos judiciales, totalizados y las generales que quieran presentar los interesados, para lo cual se hallan clasificados convenientemente los presupuestos que figen para la subasta.

15.º No obstante haber eliminado de los actuales presupuestos las fincas enagenadas y satisfacerlas por los comprados, cualquier alteración que a lo sucesivo pueda ofrecer este trabajo, será objeto de una rectificación por parte de esta oficina con referencia a los inventarios y demás antecedentes que existen en la misma.

16.º Quedan exceptuadas las casas rectorales, huertos y otras tierras anexas a las mismas; y en el caso de que se hubiera comprendido alguna, se considerará como baja para el arrendatario, previo el expediente de instrucción.

17.º Los arrendatarios no podrán utilizarse de las fincas que no consten en los inventarios, y que por consecuencia han dejado de figurar en los presupuestos; pero le serán imputadas las que además de las incluidas en ellos resulten deber arrendarse, bien sea por desembrimiento u otro concepto. Debiendo ser consideradas como ocultas las que todavía se detentan al Estado y pertenecen única y exclusivamente al dominio de la investigación, quedan sujetos a las penas de instrucción los arrendatarios y colonos que clandestinamente quieran aprovecharse de otras fincas, que aquellas de que con referencia a los inventarios facilitará desde luego individual relación esta Administración principal.

18.º Quedarán también sujetos los arrendatarios a las demás condiciones que particularmente se hallan establecidas por las leyes y adoptadas por la costumbre en la provincia, siempre que no se opongan a las contenidas en este pliego; y siendo una de ellas la de satisfacer a los arrendatarios salientes los gastos ocasionados en el cultivo de las tierras de pan llevar o de otro fruto, queda de cuenta de los entrantes el abono de los legítimos gastos que hayan tenido en dicho cultivo; entendiéndose que estos deberán también ejecutarlos para que las fincas no sufran menoscabo alguno, mediante a que es de su obli-

gación el laboreo de las citadas tierras, que deberá satisfacerse asimismo por los siguientes arrendatarios que hayan de sucederles.

Orense 27 de julio de 1860.—Felipe Santiago Medina.

SEXTA SECCION.

Ayuntamiento de Irijo.

Esta corporación autorizada competentemente por la superioridad, acordó sacar a pública subasta la construcción de un pontillon en el rio que baja de Irijo a Puente Pereiras en dirección del camino que de esta Alcaldía va a Lalin y provincia de Lugo, cuya obra constará de las dimensiones y bajo las condiciones siguientes:

1.º Cuarenta y nueve piedras de un metro y seis decímetros de longitud, cinco decímetros de latitud y dos de espesor o gruesa para cubiertas de siete acueductos u ojos del pontillon, que se regula su coste de cortarlas y desbaste en el monte, 500 reales.

2.º Doce metros cúbicos de sillería labrada a pico grueso, incluso cortarlas en el monte, para perpiños del pontillon, su coste se regula en 480 rs.

3.º Seis metros cúbicos de sillería en bruto, algo desvastada para cimientos de los perpiños; su coste se regula en 150 rs.

4.º Veinte y cuatro metros cúbicos de mampostería para muros de los costados del relleno; su coste se regula en 381 rs.

5.º Veinte y dos metros cúbicos de mampostería gruesa para calzada que evite la destrucción de los cimientos, regulado su coste en 352 rs.

6.º Para retirar las aguas y excavación de cimientos se regula su coste en 138 rs.

7.º Se regula para asiento de toda la sillería, mampostería, calzadas, rellenos y asiento de las cubiertas del pontillon, 996 rs.—Total 3,000 rs.

El remate tendrá lugar en un solo acto ante esta corporación el domingo 26 del corriente mes desde las cuatro a las seis de la tarde en la sala consistorial, admitiéndose por la secretaría hasta entonces, y desde que se anuncie en el Boletín oficial de la provincia las proposiciones que se hagan, bien por escrito o de palabra cuyas proposiciones girarán en baja de la cantidad presupuestada que sirve de tipo para la subasta, y ninguna que exceda será admitida.

La obra comenzará precisamente a los ocho días de adjudicado el remate y se concluirá antes del mes de diciembre del año actual, bajo pérdida de cuantos trabajos estén hechos en la obra con sus materiales y la quiebra que resulte si el contratista diese lugar a nueva subasta.

El pago será de cuenta del Ayuntamiento, el que se verificará terminada que sea la obra, previo reconocimiento de peritos que nombre la corporación para ver si está construida con solidez y con arreglo a contrata y aun cuando se adelantase un pago nunca excederá de la mitad hasta ultimarse la obra.

El rematante otorgará por su cuenta la correspondiente escritura de obligación y fianza a satisfacción del Ayuntamiento.

En la secretaría del mismo se hallarán de manifiesto todos los demás antecedentes relativos al asunto, de los cuales podrán enterarse mas por menor las personas que gusten.

Irijo y agosto 8 de 1860.—E. A. Juan Rodríguez.—Lorenzo Perez, secretario.

Con el fin de proceder con el mejor acierto a la rectificación del amillaramiento o padron de riqueza de este distrito que ha de servir de base para la formación del reparto de la contribución territorial que ha de regir en el año inmediato de 1861, este ayuntamiento y

junta pericial en sesión de este día acordó se prevenga tanto a vecinos como a forasteros que deben contribuir en este distrito, presenten en la secretaría del ayuntamiento dentro del término de veinte días a contar desde la inserción de este anuncio en el periódico oficial, las relaciones juradas de su riqueza y utilidades con sujeción a los modelos publicados en los Boletines oficiales de esta provincia de 9 y 14 de junio del año próximo pasado y mas instrucciones comunicadas al efecto; de no hacerlo, llegado su día, no serán oídas sus quejas por mas justa que sean.

Irijo y agosto 12 de 1860.—E. A. Juan Rodríguez.—Lorenzo Perez.

Idem de Riós.

Deseando la corporación y junta pericial guardar proporción la distribución de la contribución territorial con la riqueza de cada contribuyente para el próximo año de 1861, al efecto se anuncia la presentación de las relaciones de cada contribuyente, tanto por parte de los vecinos como de los forasteros, prevenidas en los artículos desde el 20 al 23 inclusive del Real decreto de 23 de mayo de 1845, lo que verificarán en el término de veinte días en la secretaría de Ayuntamiento que es también de la junta, después de anunciado en el periódico de la provincia, bajo las penas que marca el art. 24 de dicho decreto.

Riós, agosto 9 de 1860.—E. A. Antonio Gago.—El secretario, José Manuel Blanco.

Idem de Toén.

Ocupada esta junta pericial en la rectificación del padron de riqueza, base para el repartimiento de inmuebles de 1861, espera que los señores hacendados en este distrito así vecinos como forasteros presenten en la secretaría del ayuntamiento las relaciones que previenen los artículos 20, 21, 22 y 23 de la instrucción de 15 de junio de 1845, en el preciso término de un mes a contar desde hoy; pasado el que sin verificarlo se tendrá por base para la rectificación el producto imponible de cada contribuyente en el corriente año.

Toén 8 de agosto de 1860.—José M. Saco.

SECCION DE ANUNCIOS.

LA DISTINGUIDA,

AGENCIA GENERAL DE NEGOCIOS.

Prontitud, responsabilidad y economía, Librería, Consignación y Comisión.

Don Francisco Rino y Lopez en Badajoz ofrece al público su acreditada casa, la cual se encarga de cuantos negocios se le confien en la provincia y fuera de ella.

Cuenta con correspondientes en la capital de España, Ultramar y Extranjero. Recibe comisiones para comprar y vender frutos del país, como lanas, cereales, &c.

Admite en comisión para su venta libros, efectos de escritorio, perfumería y utensilios de varias clases.

Cree oportuno advertir que para el caso de encomendar su administración u otros encargos, en que se requiera o desee fianza, puede darla a satisfacción del interesado.

IMPRENTA DE D. CESAREO PAZ Y H.